

# CHILE EN LA ENCRUCIJADA

*ESTE ARTICULO FUE escrito a comienzos de 1986. Desde entonces basta hoy (15 de septiembre) han ocurrido una serie de hechos que alteran los escenarios previsibles. En síntesis cabe destacar lo siguiente:*

**EDGARDO BOENINGER**

1. El descubrimiento masivo de armas (real aunque inflado publicitariamente por el gobierno), el reciente atentado contra Pinochet, la represión posterior desencadenada por el régimen y la acción de comandos o "escuadrones de la muerte" que, en represalia, asesinaron a cinco militares de izquierda inmediatamente después del atentado, configuran un cuadro ominoso con riesgo de mayor violencia política y "guerra sucia".

2. En los primeros siete meses del año se debilitó considerablemente la pretensión del general Pinochet de permanecer en el poder más allá de 1989. En efecto, se hizo evidente la reticencia de la Fuerza Aérea, la Marina y los Carabineros frente a su eventual candidatura, en tanto que la posición de los Estados Unidos se ha ido tornando cada vez más hostil a los propósitos de continuidad del régimen. Por último, el apoyo interno se ha reducido a niveles tan bajos (menos del 20%, según encuestas políticas serias) que, salvo que se intente un fraude masivo, parece casi inconcebible que Pinochet pueda ganar un plebiscito o una elección abierta.

3. El descubrimiento de armas y el atentado, cuya autoría parece corresponder al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, han aislado y debilitado políticamente al Partido Comunista, dejándolo sin posibilidades de disputar el liderazgo en el seno de la oposición.

4. Concretamente, el 8 de septiembre trece partidos políticos firmaron el documento "Bases de sustentación del régimen democrático", que está llamado a tener gran significación en el futuro próximo. Fue suscrito por la casi totalidad de los adherentes al Acuerdo Nacional (no lo han hecho la izquierda cristiana y la derechista Unión Nacional, cuya adhesión política no se descarta) y por varios grupos de la izquierda socialista que no estaban incluidos en el acuerdo. No se trata, pues, de una coalición de centroderecha sino de un espectro muy amplio que va desde la izquierda socialista hasta la derecha democrática tradicional.

## I

**HOY CHILE ENFRENTA** la siguiente situación: un gobierno pretende regir al país bajo un sistema apoyado sólo por una minoría. Sin embargo, esta coyuntura es distinta a las de 1964 y 1970, cuando también una minoría respaldaba al gobierno, y es además mucho más grave. En primer lugar, Augusto Pinochet carece del apoyo popular que sí tuvieron los gobiernos anteriores; en segundo término, ha elaborado a través del monopolio del poder la posibilidad de extender su

mandato hasta 1997 y asimismo la de asegurarse el control militar durante los gobiernos posteriores. La Constitución de 1980, denostada por los opositores y criticada en sustancia —virtualmente no enmendable— por independientes y no demócratas, es invocada como sustento legal y elemento de cohesión para legitimar el propósito oficial de minar cualquier intento de democracia permanente en Chile.

En un principio, la mayor parte del pueblo chileno apoyó al gobierno militar pero a estas alturas de los acontecimientos ha provocado ya la oposición masiva. Esta se ha manifestado durante los últimos años a través de protestas, huelgas y el descontento de toda la nación. El aislamiento internacional en que se encuentra el régimen del general Pinochet y el repudio de la comunidad mundial contribuyen sin duda a debilitar su posición.

De cualquier manera el cono sur no es América Central y en ese sentido cualquier cambio político en Chile sólo será posible si se reúnen las condiciones internas necesarias. Los últimos acontecimientos, en particular las conclusiones del "Acuerdo Nacional para la transición hacia una democracia integral", son un ejemplo de la unión y fortalecimiento de todas las corrientes democráticas chilenas. Sin embargo, deberán sortearse no pocos obstáculos todavía, entre ellos la determinación de Pinochet de perpetuarse en el poder.

## II

**EN LOS ALBORES** de los años sesenta Chile disfrutaba de la envidiable reputación de ser una de las democracias más estables de América Latina. Se encontraba entre las naciones más avanzadas de la región, con un elevado nivel de desarrollo político, social y económico. Durante esos años diversas circunstancias históricas (caída del crecimiento, mayores demandas sociales y una cierta movilización política) contribuyeron a una metamorfosis que dividió a la política chilena en tres fracciones con proyectos de gobierno irreconciliables. La situación evolucionó, en el transcurso de esa década, desde un consenso razonable y un grado controlado de conflicto hasta una polarización extrema que culminó con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende e interrumpió el *continuo* democrático.

Esta intervención militar ha marcado el destino del país. No fue un arbitrio neutral ni una acción pacificadora que limara diferencias sino un acontecimiento que

contribuyó a acentuar el conflicto. El golpe que derrocó a Allende fue producto de una alianza entre distintos sectores de las fuerzas armadas. La renuncia obligada del general Carlos Prats como comandante en jefe del Ejército representó el triunfo de estos sectores sobre las fuerzas "constitucionalistas" leales al régimen. Todo con la anuencia y bajo la bendición de los Estados Unidos.

Desde un principio el gobierno militar interpretó su misión como una guerra contra el marxismo. Proscribió al Partido Comunista, cuyos miembros y simpatizantes fueron perseguidos y encarcelados. La población, sensibilizada por años de agudos conflictos políticos, se había vuelto básicamente hostil al gobierno. Los militares supusieron que tendrían el apoyo de los partidos políticos que se oponían a Allende, a pesar de haber disuelto el Congreso apenas consumado el golpe. Sin embargo, la severa represión y la constante violación de los derechos humanos generaron de inmediato la inconformidad de los partidos Demócrata Cristiano y Social Demócrata. La reacción del gobierno no se hizo esperar: adoptó una actitud antipolítica y antipartidaria y todos los partidos hasta entonces no proscritos fueron "suspensos indefinidamente". También otorgó el pase a retiro a los oficiales más moderados de las fuerzas armadas y apoyó el ascenso de los elementos más "duros", liderados por Pinochet, quien a menos de un año del golpe militar fue designado Jefe de Estado.

El sector empresarial y la derecha política decidieron apoyar incondicionalmente al nuevo gobierno. Sus figuras más representativas colaboraron activamente en distintas secretarías y ministerios (Hernán Cubillos, Márquez de la Plata y Jaime del Valle, entre otros). Algunos fueron designados embajadores (Sergio Diez ante la ONU y Federico Bulnes en Perú). Otros más colaboraron como asesores del Consejo de Estado (del cual el expresidente Jorge Alessandri fue Director). Dados estos nombres, y en el marco de un régimen antimarxista, no era difícil esperar que el gobierno se declarara a favor de una política económica de libre mercado. El manejo de los asuntos económicos recayó en un grupo homogéneo de profesionales formados en la Universidad de Chicago, cuya ideología los hacía confiables a los ojos de Pinochet. Ellos promovieron la "modernización" del país, a partir de un programa basado en unas cuantas reglas: el libre juego de la oferta y la demanda y la reducción despiadada de la intervención estatal en la economía.

La política del equipo económico fue eficaz en un principio. La drástica restricción de la emisión monetaria, fundada en un ejercicio extremo de poder dictatorial, mantuvo la inflación bajo control (en el momento de la caída de Allende llegaba al 500% anual). Chile tuvo acceso, gracias a un momento de liquidez debida al reciclaje de petrodólares, al crédito internacional. Esos préstamos contribuyeron a allanar el camino de la reactivación económica. El rápido crecimiento fue acompañado por una política cambiaria basada en la devaluación del peso y por una importación masiva de productos hasta entonces desconocidos en el mercado chileno. Estos hechos, que ocurrieron durante la última mitad de los años setenta, am-

pliaron las expectativas referentes al aumento progresivo del nivel de vida. Esos años de éxito dieron a Pinochet vía libre para la consolidación de su postura y la elaboración de un proyecto que aumentaría su larga vida política. Usó su poder como Comandante en Jefe del ejército para transformar el gobierno militar en su propia dictadura. Ese proceso también comprometió a las fuerzas armadas en el ejercicio de un papel en el gobierno que nunca habían desempeñado.

Pinochet aprovechó sus prerrogativas para asegurar a los oficiales que le eran leales. También dio los pasos necesarios para proteger y aumentar su control, como quedó ampliamente demostrado con el "despido" del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leight, en julio de 1978. Desde entonces no hay oposición efectiva dentro de las Fuerzas Armadas. El ejército le es fiel, sus miembros han jurado la constitución de 1980 y no se cansan de repetir al pueblo que apoyarán su gestión al menos hasta 1989. Vencido ese plazo, la continuidad de esa lealtad política aparece aún como un enigma.

El proyecto personal de Pinochet es conservar su doble liderazgo: como gobernante supremo de la nación y como Jefe de las Fuerzas Armadas. Ese deseo ha crecido a la luz de un proyecto elaborado por la extrema derecha (el grupo "gremialista" dirigido por Jaime Guzmán), los nacionalistas y el grupo de economistas de Chicago (a quienes une la teoría de un libre mercado totalmente irrestricto) que prevé una "democracia protegida" fuertemente autoritaria. Sustenta las expectativas de estos tres sectores la Constitución de 1980, adoptada por un controvertido plebiscito que violó las más elementales garantías de respeto a las libertades públicas y los procedimientos regulares de consulta.

Los artículos de la Carta Magna que legisla el periodo de "transición hacia la democracia" abren las puertas a Pinochet para permanecer como Presidente de la República por ocho años y para que durante ese lapso ejerza la suma del poder público, lo que equivale a transformar al gobierno en una dictadura legal. El artículo concerniente a la transición también prevé que la sucesión presidencial se haga a través de un plebiscito, figura creada para asegurar en el poder al dictador hasta 1997 y para garantizarle, hasta 1995, su jerarquía de Comandante en Jefe del Ejército. Se trata pues de una estructura institucional que le permitirá establecerse en el poder por 24 años, en un país donde nadie ha gobernado por más de diez. Los artículos de la constitución que se refieren a la época posterior a Pinochet son igualmente antidemocráticos. Legislan un modelo que sus defensores han denominado "democracia protegida", fundado en un sistema de presidencia autocrática pero con un poder de veto concedido a las fuerzas armadas a través de un Consejo Nacional de Seguridad con poder para reformar la constitución o bien hacerla definitivamente irreformable. La promulgación de la Constitución y la asunción

de la presidencia por parte del general Pinochet marcaron el apogeo del régimen militar y del poder del dictador. Sin embargo, el éxito económico que sentara las bases para la popularidad del régimen tendría una vida breve.

Hacia fines de 1981 el crecimiento daría lugar a una profunda crisis de la cual el país está muy lejos de recuperarse. Los créditos internacionales decayeron a raíz de la crisis económica internacional y a eso debemos agregar los efectos de un peso sobrevaluado. El balance de pagos, severamente deteriorado, obligó al gobierno a reducir drásticamente las importaciones. Las tasas de interés ascendieron en forma vertiginosa, con la consecuente reacción de la plaza bursátil chilena, lo que obligó a un giro drástico en la política económica. El desempleo aumentó al 30% y las quiebras llegaron a su pico más elevado en la historia del país (también en ese año los sueldos cayeron y el producto bruto interno disminuyó un 13%). Esta crisis puso de manifiesto la debilidad del modelo de Chicago, extremadamente sensible a los vaivenes de la economía internacional, como lo señalara en su oportunidad la CIEPLAN (Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina), dirigida por Alejandro Foxley. El régimen no ha logrado aún revertir el debilitamiento que se manifiesta en todos los sectores. Este se observa especialmente en la imposibilidad del ahorro interno y en los enormes préstamos internacionales contraídos para sobrellevar el peso de una deuda superior a los 20 billones (gastados en la importación de bienes de consumo). A esto se suma un desempleo superior al 20%, el inminente colapso del sistema bancario y el endeudamiento del sector empresarial contraído durante el boom.

El optimismo que durante los años setenta dominaba en vastos sectores de la población cedió su lugar a un sentimiento de desilusión y frustración. En algunas regiones, el desempleo, la pobreza y la desesperanza fueron creciendo. Los chilenos cayeron en la cuenta de que su nivel de vida no había crecido desde 1964 y de que la distribución social de la riqueza y los ingresos había empeorado. En el distrito metropolitano de Santiago, el gasto mensual de una familia perteneciente al sector más pobre de la población, correspondía a sólo el 10% del gasto mensual de una familia de los sectores sociales más elevados. Desde 1973, el poder adquisitivo de las clases con menores recursos cayó un 30% en términos reales y para los sectores más beneficiados aumentó en un 15%. Así, el desastre económico, la violación de los derechos humanos y la cancelación de las libertades civiles, contribuyeron a la valoración negativa del régimen y la exigencia de cambios políticos se expandió rápidamente politizando a toda la nación. Los partidos políticos proscritos desde el golpe de Estado pudieron sobrevivir en la clandestinidad y poco a poco fueron recobrando credibilidad y espacio para maniobrar. Los sindicatos, los colegios de profesionales y los centros estudiantiles universitarios revivieron como fuerzas de oposición al gobierno.

Los más perjudicados por la crisis económica fueron los primeros en salir a la calle para protestar contra el régimen de Pinochet y para exigir mejoras eco-

nómicas. En 1983 y 1984 los sindicatos y los partidos políticos tomaron la iniciativa y organizaron mensualmente protestas masivas en Santiago, Valparaíso y Concepción: en ellas participaron también obreros, estudiantes y habitantes de las zonas marginales. Un número considerable de personas de la clase media también se unió a las protestas; sin embargo, se fueron retirando a medida que los enfrentamientos entre militantes y policías se volvían más violentos.

Luego de cuatro años de decadencia (1982-85), el estado de ánimo de la sociedad chilena sufrió un cambio tan radical que las encuestas hechas en Santiago, en la segunda mitad de 1985, muestran que no alcanza el 15% el sector de la población que aún apoya a Pinochet. El 80% expresó su deseo de un retorno a la democracia antes de 1989. En las últimas elecciones nacionales del Colegio de Docentes, el candidato del gobierno obtuvo el último lugar con menos del 10% de los votos. En las elecciones estudiantiles de 1985, no hubo un solo candidato oficialista. Queda claro entonces que aquellos que en un principio apoyaron, aún condicionalmente, al régimen, ahora lo rechazan.

### III

LOS PARTIDOS POLÍTICOS de Chile son hoy prácticamente los mismos que en 1973. De cualquier modo la organización partidaria no es la misma: allí se está gestando un proceso evolutivo que será de gran importancia para la consolidación de la democracia.

Desde 1929 a 1958, el espectro político estaba integrado por partidos bien organizados cuyo pivote era el Partido Radical, moderado de centro y representante de una extendida clase media con gran peso político en el país. En 1930, el Partido Radical estaba en el gobierno y jugó un importante papel en el proceso de industrialización que se dio a través de la sustitución de importaciones, motivada por la Gran Depresión. De esos años, y que disminuyó la capacidad importadora. Hacia mediados de los años cincuenta el proceso de industrialización derivó en un creciente estancamiento y una crónica inflación. Fue entonces cuando el pueblo comenzó a presionar por obtener mejoras en el nivel de vida y una mayor participación política. La clase trabajadora se agrupó en sindicatos independientes del Estado, de donde surgieron los líderes de la izquierda. La percepción de la crisis se extendió a toda la élite política, la que coincidió en un diagnóstico pesimista: el modelo de crecimiento imperante y el sistema político se encontraban en franca decadencia. La sociedad chilena se fue transformando por la politización de la masa y la decadencia económica. El centro, la izquierda y la derecha reaccionaron frente a la crisis con diferentes propuestas y una común intransigencia.

El dominio, que ejerciera el Partido Radical sobre el campo político fue decayendo con la aparición en la escena, en 1958, del Partido Demócrata Cristiano, que propuso un nuevo camino para el país. El PDC creció

dentro del Partido Conservador pero se fue perfilando como la voz de un cristianismo renovador que, particularmente en Latinoamérica, sostuvo la bandera de la justicia social y ayudó a remediar los males causados por la desigualdad excesiva en la distribución de la riqueza. Es evidente entonces que el centro no sería ya, como en épocas del Partido Radical, un equilibrio entre izquierda y derecha. Así el nuevo líder del centro fue un partido ideológicamente sólido y con una propuesta propia que se constituyó en alternativa frente al comunismo y a las fuerzas conservadoras de la derecha.

La izquierda, por su parte, se radicalizó en respuesta al clima general de descontento y en 1958 se produjo la alianza entre el Partido Comunista pro-soviético y el Partido Socialista. Los comunistas fueron siempre indiscutiblemente ortodoxos en cuanto a doctrina (no así en relación con la praxis: siempre respetaron los procedimientos democráticos). Los socialistas, a consecuencia de los sueños revolucionarios provenientes de Cuba, fueron radicalizándose y aún en 1967 se proclamaban "leninistas".

La evolución de las fuerzas de centro y de izquierda, profundizó el aislamiento de la derecha. En 1985, la radicalización de la política se agudizó vertiginosamente y la representación de la derecha en el Congreso se redujo a una minoría. Así, la necesidad obligó a conservadores, liberales y nacionalistas a unirse bajo la bandera del Partido Nacional; carentes de una alternativa política propia, se limitaron a coartar cualquier proceso de cambio. De 1958 en adelante la competencia política estuvo planteada exclusivamente entre tres bloques, cada uno con un tercio del electorado a su favor. De esta manera surgieron tres gobiernos sucesivos de minorías: uno de derecha, el de Alessandri (1958-1964), otro demócrata cristiano con Eduardo Frei como presidente (1964-1970) y finalmente uno de izquierda, del partido Popular Unido, cuyo presidente fue Salvador Allende (1970-73).

El gobierno de Frei, representante de tan sólo un tercio del electorado, tuvo que enfrentarse durante su mandato con una implacable oposición de los dos tercios restantes. No demostró ninguna inclinación a formar coaliciones que hubieran servido de base para la formación de un gobierno de mayoría. Aquí conviene recordar que en Chile, cuando un candidato alcanza más votos que los demás, no se realiza una segunda elección popular para lograr la mayoría, sino que la presidencia se decide por los votos del Congreso. En ese sentido, cada presidente, para imponer un programa de gobierno sólo apoyado por la minoría, tiende a reducir las prerrogativas de un congreso básicamente opositor y utiliza la legitimidad de su mandato para presionar sobre sus adversarios. La "revolución en libertad" fue el programa de reformas estructurales que propuso el Presidente Frei, oponiéndose a la derecha (cuyos intereses eran contrarios a la reforma agraria, apoyada por la Alianza del Progreso). La tensión entre los representantes de sectores de derecha y el Partido Demócrata Cristiano aún persiste. En cuanto a la izquierda, los partidos influidos por el modelo cubano rechazaron el proyecto de Frei, al cual calificaron de "reforma neo-capitalista". Ellos se vieron obliga-

dos a extremar sus posiciones para no quedar postergados por la Democracia Cristiana y aparecer tan sólo como "servidores del cambio".

La "transición al socialismo" impulsada por el gobierno de Allende en 1970-73 planteó una política más radical que la del gobierno de Frei y finalmente llevó a Chile a un extremismo casi incompatible con la preservación del orden democrático. Durante los tres años de su gobierno, Allende puso en marcha una política de apropiación y control de los bienes de producción. Asimismo, proclamó la irreversibilidad del proyecto que pretendía instituir. El resto del espectro político sintió comprometidas las libertades del sistema democrático. Las políticas del partido Popular Unido alejaron a los demócratas cristianos e incluso a aquellos que en un principio apoyaron un programa basado en múltiples cambios sociales. El gobierno de Allende socavó las expectativas de la derecha con respecto a la democracia y enfrentó a ese sector con los dos bloques que, si bien diferían totalmente en algunos aspectos, apoyaban los cambios económicos y sociales contrarios a sus intereses. Al fracasar en su intento de detener el proceso de cambio, la derecha tomó conciencia de que aquella democracia no garantizaba ya sus intereses de clase. En estas condiciones, cualquier posibilidad de acuerdo político estaba perdido y la fractura del proceso democrático parecía inevitable. Esta polarización precipitó, sin duda, el golpe de Estado de 1973. Pinochet invoca la historia para sostener su argumento de que entonces los partidos políticos no fueron capaces de gobernar, y son éstos los que hoy se enfrentan al desafío de erradicar aquel recuerdo y de intentar constituirse en alternativa confiable frente al régimen militar.

#### IV

ACTUALMENTE, EL SOCIALISMO chileno atraviesa por una etapa similar a la que caracterizó durante la última década la evolución de los partidos socialistas de Europa. Esto implicaría una moderación de los aspectos ideológicos y un acercamiento del socialismo a las políticas de los sectores de centro. Si esta tendencia continuase su curso, la izquierda chilena se dividiría en un ala ortodoxa y otra modernizada, en cuyo caso ya no existirían las tres fracciones clásicas que hicieran la democracia chilena tan ingobernable. Al mismo tiempo, hubo cambios significativos en la conducción de la Democracia Cristiana, sobre todo en el histórico empeño por tener "un camino propio" que la obligaba a rechazar cualquier alianza con la derecha o con sectores marxistas. Actualmente, el partido ha decidido asumir su papel activamente reconociéndose como puente político, papel que le estaba destinado por su situación en el centro del espacio político chileno.

La primera expresión concreta de todos estos cambios fue la formación, a mediados de 1983, de la Alianza Democrática, integrada por el Partido Socialista, el

Demócrata Cristiano y otros partidos de centro. Sentando un precedente en la historia chilena, los líderes de esos partidos decidieron que la oposición a Pinochet hacía necesaria la coalición, para enfrentarlo a un bloque homogéneo. Este proceso se vio reforzado por los partidos ideológicamente más moderados que, aumentando su voluntad de comprometerse, se unieron en la defensa de los derechos humanos y sobre todo en el reclamo de una rápida reimplantación de la democracia. Los líderes de la Alianza Democrática son el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Valdés, los socialistas Carlos Briones y Ricardo Lagos, el presidente del Partido Radical, Enrique Silva, el socialdemócrata René Abeliuk y el republicano Hugo Zepeda. Este conglomerado político representa hoy el 50% del electorado. Si bien los partidos aún no se han pronunciado acerca de si permanecerán o no unidos después del periodo de transición, la Alianza Democrática se perfila ya como una fuerza permanente. Su empeño es lograr la restauración de la democracia en el menor tiempo posible y la estrategia para lograrlo es la movilización popular, básicamente no violenta, contra el régimen, para obligarlo a condescender y aceptar una manera específica de transición que incluya la reimplantación de las libertades civiles, el fin de los poderes extraordinarios de Pinochet, la reforma de la constitución y la determinación de plazos para elecciones generales.

Durante el verano de 1983, los problemas económicos y la pérdida de credibilidad obligaron al gobierno a considerar por primera vez los reclamos de un cambio político. La sucesión de protestas lograron que Pinochet nombrara Jefe de Gabinete a un político civil —hombre de derecha—, Sergio Onofre Jarpa, quien tuvo a su cargo el diálogo con la Alianza Democrática. Estimulada por el éxito que significó forzar el diálogo, la AD sobreestimó sus fuerzas y subestimó las del gobierno. Propuso a Pinochet que renunciara, solución un tanto drástica para la cual una parte considerable del país no estaba aún preparada. Para muchos no estaba clara aún la alternativa que significaba la AD; la consideraban frágil y experimental. Asimismo, amplios sectores de la sociedad, especialmente los conservadores, y una vasta proporción de la clase media, continúan temerosos frente a la incertidumbre de la democracia (que en Chile presentó siempre una tendencia a izquierdizarse). De ahí que algunos grupos representativos de la clase media abandonaran las protestas, lo que dejó a la AD sin el respaldo indispensable para llevar adelante sus diálogos con Jarpa. Pinochet, entonces, retomó la iniciativa y dio por finalizado el diálogo. En noviembre de 1984 decretó el Estado de Sitio, una variante de la ley marcial.

El fracaso de la estrategia de la AD, basada en la movilización pacífica y el carácter intransigente del régimen, favoreció al Partido Comunista, que sigue siendo un protagonista importante de la escena política. Este partido ha sido investido con el halo de los perseguidos y también ha obtenido cierto prestigio por haber realizado los ataques más frontales a la dictadura. Además, el desempleo, la pobreza y la injusticia contribuyen a una mayor radicalización política tanto de la clase baja como de los sectores más sensibles a la rea-

lidad social y a la ausencia de libertad, entre ellos el de los estudiantes universitarios. El Partido Comunista, como cabeza del conglomerado político que es el Movimiento Popular Democrático (MPD), propugna una estrategia doble. Por un lado, promueve la insurrección y la violencia política apoyando y encabezando la acción de grupos terroristas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que asume la autoría de un número considerable de atentados recientes (apagones, bombas en edificios públicos, incendio del transporte público o ataques a policías). Por otro lado, predica la unidad política de la totalidad de las fuerzas contrarias a Pinochet, alternativa seductora para quienes piensan que por sí sola la unión asegura el triunfo de la oposición.

Esta estrategia ambivalente amenaza la pretensión de la AD de alcanzar una oposición hegemónica. El llamado al levantamiento tiene el apoyo de los sectores más extremistas, mientras que el estribillo "unidad" resulta más atractivo para otros sectores (como, por ejemplo, el de las elecciones estudiantiles). En éstas, las juventudes del Partido Comunista y Demócrata Cristiano formaron alianzas basadas no en coincidencias doctrinarias sino más bien en el deseo de combatir al enemigo común: el general Pinochet. El gobierno aprovecha esas alianzas para aumentar los temores de los conservadores y la clase media respecto al futuro de la democracia. La nueva unión de la oposición (MDP y AD) sería paradójicamente no un factor para intensificar la presión al gobierno sino más bien el hecho que provocaría el reagrupamiento de la derecha y de aquellos grupos que se declaran "defensores de la ley y del orden". La AD, consciente de esto, ha repudiado sistemáticamente los avances comunistas. Otra cuestión de suma importancia en la escena política es la desilusión progresiva que el régimen ha provocado en la derecha chilena. El apoyo incondicional de los primeros tiempos tuvo su punto culminante en el respaldo público a la Constitución de 1980. Sin embargo, luego la crisis estalló y casi sucumbe el sistema financiero (los principales bancos privados tuvieron que pasar al control del gobierno en enero de 1983). Con las secuelas del estancamiento, el endeudamiento del sector empresarial y la crisis en el balance de pagos, la fidelidad de los conservadores se debilitó y dejó paso a una valoración negativa del gobierno y sus posibilidades futuras. A medida que se extendían la insatisfacción, la radicalización popular y la protesta social, aquellos que hasta entonces defendían al sistema que los "salvó del comunismo" asegurando la propiedad privada, la ley y el orden, comenzaron a mirarlo con otros ojos. La toma de conciencia respecto al aislamiento internacional y a las violaciones de los derechos humanos trajo consigo el temor a un estallido de violencia popular. En breve, sus ojos se abrieron frente a un régimen sin otro proyecto para el futuro que la Constitución de 1980, "cáscara vacía" sustentada en un puro anticomunismo absolutamente negativo que ofrece tan sólo la garantía de la lucha contra el mar-

xismo en lugar de alguna esperanza de desarrollo y progreso. Los conservadores comenzaron a observar que

preservar a Pinochet en el poder era absolutamente innecesario y peligroso. Los riesgos de mantener el *status quo* se volvieron tanto más riesgosos que los simplificados en el regreso de la competencia electoral que ofrece la democracia.

Hacia fines de 1985, la mayoría de la derecha chilena ya no se declaró abiertamente a favor del régimen y, aun sin calificar su posición como opositora, prefirió definirse como independiente del gobierno. Esta postura ha sido declarada por dos de los partidos más representativos del sector: el Nacional y el de la Unidad Nacional. Los únicos que mantienen su apoyo al general Pinochet son la Unión Democrática Independiente —representativa del "gremialismo" inspirado ideológicamente en Guzmán— y el Movimiento Corporativo, populista de derecha, que el Ministro Jarpa está intentando crear en estos momentos. La coyuntura refleja la coexistencia de una derecha democrática con otra básicamente autoritaria; semejante división ha ocurrido sin duda en el sector de la izquierda. En resumen, hacia la mitad de 1983 hubo tres cambios de importancia: una nueva orientación del socialismo de izquierda hacia una postura democrática, la tendencia de la DC a constituir alianzas y asumirse como puente político, y la emergencia de un sector de derecha independiente del gobierno militar. Estos cambios eran ya notables en la primavera de 1985, lo que posibilitó una respuesta positiva de los distintos bloques al llamado a la reconciliación nacional hecho por el Cardenal Juan Francisco Fresno, Arzobispo de Santiago. Hombre indicado para el papel de mediador, representa por una parte a un importante sector de la Iglesia que participó en la defensa de los derechos humanos, lo que lo legitima a los ojos de la izquierda, y por otra parte es considerado un sacerdote conservador cuyo nombramiento para la diócesis fue bienvenido por el gobierno y por los sectores de derecha.

En marzo, la nación entera se conmocionó por el brutal asesinato de tres conocidos líderes comunistas. La sentencia del Juez José Cánovas Robles dictaminó la aparente responsabilidad oficial en esos crímenes, específicamente la de una unidad especial de Carabineros. Fue la primera vez en doce años que un juez admitió la implicación de militares en crímenes cometidos por la policía. El revuelo producido por ese veredicto impulsó a la oposición y a los independientes de derecha a firmar también el Acuerdo Nacional en agosto de 1985. El documento, un llamado a la transición hacia una democracia completa fue firmado asimismo por todos los partidos de la AD, el Partido Nacional y el Partido de la Unidad Nacional. Además obtuvo el apoyo de los sectores de izquierda que no pertenecen a la AD o al MDP. Los únicos que se abstuvieron fueron la extrema izquierda y los sectores aliados al gobierno.

## V

EL ACUERDO NACIONAL es el paso más vigoroso dado por las fuerzas democráticas. Su importancia es mayor que la de cualquier otro hecho político de los úl-

timos doce años. Por primera vez, los opositores de izquierda, de centro e independientes de derecha se unen bajo un propósito formal que no es una alianza política ni un programa de gobierno. En Chile se define al Acuerdo como un documento que determina las "reglas del juego", sienta las bases constitucionales, políticas y socioeconómicas para la futura democracia y establece las medidas políticas a corto plazo que sus adherentes y firmantes consideran necesarias para asegurar una pacífica transición hacia la democracia y su posterior consolidación. Lo propuesto por el Acuerdo difiere notablemente de términos y plazos oficiales, pero pretende solucionar el aislamiento de Pinochet al instaurar una instancia de persuasión para posibles negociaciones con las Fuerzas Armadas y la población. Es evidente que no ha sido firmado en actitud de antagonismo. Propone un mínimo indispensable de reformas constitucionales, cambia el procedimiento de enmienda de la Constitución y modifica el sistema de sucesión presidencial. Establece garantías en lo socioeconómico (respeto por la propiedad privada y los derechos de los trabajadores). También se expide sobre las fuerzas armadas, el apoyo económico para la lucha antiterrorista y el repudio de cualquier forma de justicia popular para el juicio de los casos de violación de derechos humanos. Esto último se ha gestado a raíz del juicio a las Juntas Militares en Argentina. Finalmente, convoca a tomar urgentes medidas para restaurar de inmediato las libertades públicas y permitir el proceso de transición.

El Acuerdo Nacional produjo un fuerte impacto en la opinión pública y aparentemente tuvo también un efecto considerable en las Fuerzas Armadas, como puede deducirse del comentario favorable que arrancó al comandante de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei. El Pacto no ha sido pensado para crear un conflicto abierto con el ejército, pero llegado el momento ayudará a sus elementos más moderados a apoyar el regreso a la democracia en 1989, por encima de aquellos otros comprometidos con la reelección de Pinochet. En la población, el Acuerdo permitió reavivar la sensación de que en Chile la democracia es aún posible y no un salto al vacío, una alternativa real y no un mero espejismo. Sin embargo, estos signos optimistas no deben alentar expectativas infundadas: la creencia de que es un hecho seguro el regreso pacífico a la democracia, que todo está ya asegurado. El Acuerdo es sólo un primer paso y aún sufre de una seria debilidad. Los firmantes todavía no han acordado una estrategia concerniente a plazos y métodos. Los sectores independientes de derecha consideran que Pinochet debe completar su mandato, lo que implica que los cambios políticos no ocurrirán sino hasta 1989. Los "opositores" (partidos de la AD) piensan que el regreso a la democracia debe hacerse cuanto antes, ya que moral y emocionalmente rechazan la idea de que Pinochet siga en el poder, aun cuando reconocen que esto es posible. La derecha favorece la negociación como instrumento único, sobre todo porque teme a la violen-



cia hacia la que evoluciona la movilización social y que podría ser eventualmente reprimida por las Fuerzas Armadas. También teme y repudia el papel preponderante del Partido Comunista en la agitación social. Los partidos de la AD, y en este punto coinciden con la izquierda extrema, insisten en el hecho de que sólo una persistente presión de todo el pueblo chileno, una demostración de fuerza y de voluntad de cambio obligará a Pinochet a renunciar a su idea de permanecer indefinidamente en el poder y traerá a las Fuerzas Armadas a la mesa de la negociación. La AD entiende que cuanto más tiempo permanezca Pinochet en el poder la movilización de la masa se hará más inevitable. Sostiene que si ese levantamiento no es encauzado y conducido por sectores moderados entonces el PC y sus aliados se harán cargo de la situación, lo que llevaría a una confrontación inevitable y eventualmente a una guerra civil que haría ya definitivamente imposible una salida democrática.

La reacción del gobierno frente al Acuerdo no se hizo esperar: lisa y llanamente lo rechazó, con la clara intención de destruirlo incluso a costa de aumentar su confrontación con la Iglesia. El régimen intentó exacerbar las diferencias de los distintos partidos con relación al documento y acentuó las mutuas desconfianzas, sobre todo la de aquellos que militaban en posiciones totalmente opuestas dentro del espectro político. A estas alturas, Pinochet ha denunciado alianzas entre los "demócratas" —refiriéndose a la derecha de la Democracia Cristiana— y los "marxistas" —socialistas y demás partidos de izquierda—, como una sucia maniobra política. El gobierno también ha acusado a los firmantes del Acuerdo de haber sido ambiguos en los temas más espinosos (como los referentes a las garantías del derecho de propiedad y el juicio por violación de derechos humanos). Esto sin duda contribuye a aumentar el temor de militares y conservadores. Pinochet ha logrado focalizar el debate público en torno de aquellos temas sobre los que los firmantes del Pacto se encuentran en desacuerdo: movilización social vs. negociación y plazos para la transición. Esto ha aumentado la fricción entre los distintos sectores. Finalmente, ha denunciado la participación conjunta de DC y comunistas en las protestas callejeras y las elecciones estudiantiles, con lo cual ha logrado dar una imagen ambigua y poco confiable de la DC. De ese modo, hacia fines de 1985, el Acuerdo Nacional había logrado debilitar a Pinochet pero también se había debilitado a sí mismo. Evidentemente, el gobierno ha perdido credibilidad pero es cierto también que ni la Alianza Democrática —la coalición electoral más moderada— ni el Acuerdo Nacional parecen tener suficiente fuerza para impulsar un cambio político en un futuro cercano o persuadir a las fuerzas armadas de entregar el poder en 1989 o antes. Resolver sus desacuerdos, reforzar su credibilidad y ejercer un máximo de presión sobre el régimen serán sin duda los dilemas que las élites políticas deberán resolver en un futuro inmediato.

## VI

CUALQUIER EVALUACIÓN DE posibilidades futuras deberá en primer lugar reconocer la incertidumbre rei-

nante. Que existe la posibilidad de una transición pacífica es ya indiscutible, pero existe también el gran riesgo de una polarización extrema (con la consecuente confrontación que tendría consecuencias catastróficas para el país). Los próximos dos años serán sin duda decisivos. La peor resolución sería exacerbar el conflicto entre Pinochet (como símbolo de un gobierno que piensa perpetuarse en el poder) y una oposición dispuesta a derrocarlo lo antes posible. Hay una evidencia cierta de la total intransigencia del general Pinochet: no cederá su poder a menos que se le obligue a ello. Estos hechos hacen que la población haga suya una falsa opción entre movilización social y negociación. Sin negociación no habrá salida democrática pero no habrá negociación si no se ejerce sobre las Fuerzas Armadas presión suficiente, resuelta y persistente. En consecuencia el desafío para la élite política chilena será generar una fuerza pacífica de presión liderada por los sectores moderados tendiente a unificar a la clase media y a los trabajadores en una voluntad común de solución democrática. Al mismo tiempo, un elemento importante para esta presión será el constante esfuerzo de los firmantes del Acuerdo Nacional para establecer algún tipo de negociación con el régimen. Sólo la perseverancia puede persuadir y en todo caso obligar a quienes rehuyen el diálogo a sentarse a negociar. El requisito para que esto sea realmente posible será exponer públicamente el Acuerdo Nacional con todo detalle para superar la desconfianza de la derecha hacia la AD.

Un elemento a considerar es el papel que cumplirán las fuerzas marxistas en la MDP. Es necesario encontrar el modo de incorporarlas al proceso político y sentar las condiciones bajo las cuales se ajustarán a las reglas de la democracia. La historia muestra, repetidas veces, que es imposible excluir a un sector de la población de su derecho a la participación política (y el Partido Comunista chileno tiene el apoyo de un 15% del electorado). Para ejemplificar esto me remito a la inestabilidad política y a la ausencia de democracia en Argentina en la época en que fue proscrito el Partido Peronista. Quizás, en este caso, una solución aceptable para las Fuerzas Armadas sea el compromiso de la AD de no establecer futuras alianzas con el Partido Comunista; tal actitud, unida a mecanismos de participación colectiva en las tomas de decisiones (a la manera del Consejo Económico y Social Europeo), aseguraría un pluralismo de voces en los asuntos públicos que induciría a la extrema izquierda a actuar de acuerdo al proceso democrático que marca a casi toda la historia de Chile.

Enumeraré a continuación algunas de las alternativas posibles para el escenario político chileno en el caso de que el presente proceso político siga su curso hasta 1989.

*Continuación del régimen de Pinochet:*

Parece imposible (a menos que se den las terribles con-

diciones necesarias para ello), que el general Pinochet logre permanecer en escena después de 1989. Las Fuerzas Armadas y los civiles coinciden en que el plebiscito de ese año ratificará la presidencia del actual mandatario, ya que si la opción popular se plantea en términos de sí o no por Pinochet, el resultado será absolutamente negativo. Además, ya no están dadas las condiciones que hicieran posible un resultado fraudulento. La Corte Suprema, cuyos miembros son juristas representantes de la derecha, han decretado ya que la Cámara Electoral (independiente por disposición Constitucional) está capacitada para supervisar el *referendum* —contrariando en esto a la opinión del gobierno. Además, la fuerte presión internacional y la presencia de observadores extranjeros harían que el intento de fraude fuera verdaderamente difícil y por cierto provocador. La caída de Ferdinando Marcos en Filipinas es un vivo ejemplo cercano y ya nadie en Chile supone que un fraude es viable. La derecha propuso como alternativa una enmienda a la Constitución de 1980 para convocar a elecciones generales en 1989 con Pinochet como candidato, cosa que es altamente improbable: Pinochet no es Marcos, hombre ducho en política y habituado a la lucha electoral, sino más bien un simple militar acostumbrado a ser obedecido e imponer su voluntad. De cualquier modo, es imposible que en una elección abierta un Comandante en Jefe del Ejército presente su candidatura ya que la Constitución no lo permite. Para hacerlo, tendría que renunciar a ese cargo, que es su única garantía de poder y de seguridad personal. Así, presentar su candidatura sería, en virtud de sus pocas posibilidades de triunfo, una jugada sumamente peligrosa.

#### *Permanencia indirecta del régimen:*

También es posible la permanencia del actual régimen en un gobierno cuya cabeza visible fuese otro oficial de las fuerzas armadas. Sin embargo, el alto grado de personalización del poder en la figura de Pinochet no permitió el surgimiento de otra figura militar con suficiente altura política como para reemplazarlo. La mejor posibilidad para él y el sistema actual sería la elección por plebiscito o voto directo de un civil que diese las garantías para la continuidad del régimen sin desplazarlo como Comandante en Jefe del Ejército. Esta alternativa de "democracia protegida" es perfectamente personificada por el Ministro Jarpa. Un candidato así obtendría no sólo los votos de la derecha sino también los de los partidos menores. Esto podría ocurrir si el MDP insistiera en el levantamiento y la AD, al verse prisionera de ambas estrategias, prefiriese al Ministro Jarpa como un mal menor. Dada su expresa postura anticomunista, Jarpa sería incluso bien visto por los Estados Unidos.

Si bien a primera vista no son evidentes las consecuencias de esta segunda salida, ellas no difieren excesivamente de las que ocasionaría la primera alternativa. Ambas proponen opciones peligrosas; sin embargo, es improbable que una solución como la que representa el Ministro Jarpa —tanto como la continuación de Pinochet en el poder— sea aceptada por el MDP o la AD. Las posiciones de estos dos sectores po-

drían acercarse y una salida tan radical no lograría sino unificar a la izquierda; en tal caso, los partidos de este sector (especialmente el socialista) se aislarían de la AD. Por otro lado, la derecha independiente —uno de los firmantes del Acuerdo—, impulsada por el miedo, estrecharía relaciones con el régimen militar, la opción aparentemente menos perjudicial. Esto desencadenaría una futura polarización y confrontación que acrecentaría los riesgos de "centroamericanización" del proceso chileno. El desenlace sería, entonces, impredecible pero difícilmente democrático.

#### *Acuerdo negociado:*

Si las fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo Nacional fortaleciesen las zonas de acuerdo y al mismo tiempo impulsaran una persistente y pacífica presión social, la salida más probable sería alguna clase de diálogo entre civiles y militares (contra los deseos de Pinochet) que llevaría a la elección de un candidato aceptable para todos y a un acuerdo sobre la reforma global de la Constitución. Así, la transición democrática se daría por elección directa o bien (aunque difícilmente) de acuerdo al procedimiento que rige actualmente el plebiscito. En la primera alternativa, el candidato sería determinado por censo y así estaría asegurada su elección por la cantidad de votos de quienes apoyan su candidatura y el triunfo sería entonces casi seguro para cualquier candidato que presentase la extrema derecha o la extrema izquierda.

#### *Triunfo de la Alianza Democrática:*

Si la AD logra obtener suficiente fuerza e imponer su hegemonía sobre la población a través del control de la movilización social y la anulación de las estrategias revolucionarias de la extrema izquierda, las fuerzas armadas aceptarían unas elecciones directas y su candidato tendría mejores posibilidades de triunfar. Para que esta opción, sin duda difícil, tuviera éxito, la AD tendría que organizarse sin la derecha y relegar a la MDP a un segundo plano para evitar el veto de las Fuerzas Armadas. La MDP se abstendría de presentarse a las elecciones apoyando incondicionalmente a la AD, o bien postularía un "candidato perdedor".

#### *Derrocamiento del régimen por rebelión popular:*

Esta es básicamente la estrategia del Partido Comunista porque permitiría la irrupción de un proyecto revolucionario basado en el modelo nicaraguense; equivale a la contraparte de la escena que propone una continuación directa o indirecta de la dictadura. Esta probabilidad sin duda crecerá si Pinochet permanece en el poder más allá de 1989 porque, en tal caso, cualquier alternativa moderada caerá en descrédito.



De todas las posibilidades expuestas, sólo las dos precedentes podrían conducir a la democracia. Las demás sólo prometen resultados inciertos.

VII

**NO HEMOS HECHO** referencia aún al papel que desempeñan en el proceso chileno las naciones democráticas de Occidente y especialmente los Estados Unidos. El requisito para asegurar una salida democrática en Chile es fundamentalmente la resolución de sus conflictos internos, que depende ante todo de los propios chilenos. Sin embargo, el gobierno norteamericano podría contribuir de distintas maneras:

1. Transmitiendo claramente el mensaje de que los Estados Unidos esperan con ansiedad el retorno a una completa democracia. (de hecho, esta tendencia se ha hecho patente desde la llegada a Chile del embajador Harry Barnes, quien ha producido un notable impacto en aquellas personas sensibles a las posiciones de los Estados Unidos, fundamentalmente entre los políticos de derecha, el sector empresarial y las Fuerzas Armadas. Naturalmente, los Estados Unidos están más dispuestos a transmitir este mensaje a medida que el país se acerca a una salida moderada.

2. Ejerciendo cierta presión (cercana a la intervención), para garantizar el respeto de los derechos humanos y la restitución de las libertades públicas en Chile. Sólo bajo estas condiciones los chilenos serán capaces de encontrar su camino. De otro modo, el problema será resuelto mediante la imposición militar de una "democracia protegida" o la intervención promo-

vida por la extrema izquierda en nombre de la "liberación del pueblo".

3. Convenciendo al gobierno chileno de que las elecciones libres y limpias son el único modo de evitar un futuro incierto de lucha y confrontación.

En mi opinión, la profundidad de la crisis, la magnitud del desafío económico y las demandas de coexistencia pacífica entre chilenos, justifican en una primera fase de la democracia la formación de un frente de coalición con la participación del centro y la izquierda y la derecha democráticas. Para el cumplimiento de esta propuesta, las garantías a la propiedad privada y a la libre asociación requeridas por la derecha deberán conciliarse con un pacto por la justicia social, compromiso necesario para resolver el problema de la extrema pobreza, la marginalidad y la injusticia que azotan a la sociedad chilena. Esta idea, proclamada por los socialistas, compartida por la DC y otros partidos de la AD, deberá ser apoyada también por una derecha renovada y moderna. Crear una gran alianza necesitará el máximo de cooperación entre las élites políticas. Esta coalición, ¿es demasiado compleja para la coyuntura chilena o, por el contrario, simplifica los conflictos que como nación debemos afrontar? El tiempo dirá, pero en Chile un "acuerdo sobre lo esencial" es imprescindible para la estabilidad democrática. Ese acuerdo sólo será posible si el crecimiento económico viene acompañado por una más justa distribución de riquezas y oportunidades.

